SISTEMA ACUSATORIO, SU INCOMPATIBILIDAD CON EL PLAZO CONSTITUCIONAL

Sadot Javier ANDRADE MARTÍNEZ*

SUMARIO: I. Avances; II. Plazo constitucional; III. Auto de ¿vinculación a proceso?; IV. Vincular a proceso; V. No vinculación a proceso; VI. Imputación y plazo constitucional injustificado; VII. Incompatibilidades del plazo constitucional; Conclusión; Fuentes consultadas.

Resumen

A partir de la implementación del sistema penal acusatorio, derivado de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se impuso a la Federación y a los Estados, la obligación de modificar sus sistemas procesales, lo cual fue cumpliéndose por las diversas entidades en los años subsecuentes, hasta que el 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, que buscando unificar la legislación procesal penal de todos los Estados y la Federación, así como hacer efectivos los principios de la norma fundamental, característicos del sistema acusatorio, incorporó en tal sistema procesal el denominado “plazo constitucional”, que si bien ha sido referente garantista dentro del sistema que tradicionalmente se mantuvo vigente en el proceso penal mexicano hasta la fecha en que se estableció el inicio gradual de la entrada en vigor de la codificación procesal nacional; sin embargo, sin atender a la estructura y características del nuevo sistema procesal que constitucionalmente debe implementarse, sin mayor justificación se decidió mantener la figura del plazo constitucional, sin advertir que no encuentra cabida en el nuevo sistema penal acusatorio, cuestionándose no solo su compatibilidad, sino sustancialmente la utilidad del mismo, en tanto que su inclusión trastoca esquemas de derechos fundamentales y celeridad procesal.

* Licenciado en *Derecho*, estudios de Especialización en *Ciencias Penales*, Maestría en *Derecho y Juicios Orales*. Igualmente, cuenta con diversos cursos Internacionales en España, Chile y Nicaragua sobre Control de Convencionalidad, Sistema Acusatorio, y Protección Jurisdiccional de Derechos de los Niños. Ha participado como conferenciante y docente en instituciones públicas y privadas y ha publicado diversos artículos. Se ha desempeñado como Director General de Control de Procesos, Juez y Magistrado Penal y actualmente es Magistrado de Justicia para Adolescentes en la Ciudad de México.

I. Avances

Es un hecho que en los últimos años, los países latinoamericanos han venido adecuando sus sistemas de justicia a un nuevo esquema que pretende de forma más efectiva garantizar los derechos de los intervinientes en el proceso penal, transitando de modelos de corte inquisitivo hacia el modelo de sistema acusatorio que permita transparentar no solo la actuación de sus operadores, sino incluso, garantizar con ello mejor calidad en la impartición de justicia.

México es uno de los últimos países Latinoamericanos en tratar de ajustarse a este esquema; no obstante, lo que por tal razón fue una debilidad, debemos aprovecharla a efecto de convertirla en fortaleza, pues la esencia no es el cambio por el cambio, sino buscar dentro del contexto de la experiencia internacional y la nacional, cómo es que se ha venido dando la implementación del sistema en los diversos países, así como en los Estados de la República Mexicana, advertir sus aciertos, pero poner mayor atención en sus tropiezos para no secundarlos dentro de lo posible, aunque también es cierto que cada actor debe tener sus propias experiencias y por ende, sus propios fracasos.

Es en este contexto que, en agosto de 2009, posterior a la reforma constitucional en materia penal, se instituyó a nivel federal el Consejo de

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica (SETEC), la cual tiene la encomienda de apoyar a los gobiernos federal y locales en este proceso, amén de que en cada entidad del país se crearon órganos homólogos. No obstante, es de sobra conocido que incluso algunas entidades, previa a la reforma constitucional, ya se habían adelantado en la adecuación total o parcial de sus Ordenamientos Jurídicos Adjetivos (los primeros en hacerlo fueron Chihuahua, Oaxaca y Morelos), mientras otros, de forma casi inmediata se dieron a la tarea de llevar a cabo las reformas correspondientes a efecto de cumplir con el mandato constitucional (así lo hicieron Zacatecas, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas y Tabasco); no obstante, actualmente casi la totalidad de las entidades del país también se han preocupado por ajustarse a la reforma constitucional y así lo han venido haciendo, generándose este proceso reformista sobre todo en el año 2014, durante el cual la gran mayoría de los estados faltantes se sumaron a realizar las adecuaciones correspondientes, tanto legislativas, como estructurales, de ahí que a la fecha únicamente al estado de Sonora está pendiente de incorporarse formalmente al sistema acusatorio, sin

embargo, ya tiene previsto hacerlo el próximo año (18 de junio de 2016)¹.

Ahora bien, no puede pasar desapercibido que el Distrito Federal ha logrado avances significativos no solo a nivel normativo, sino estructural para entrar de lleno en el sistema acusatorio al vencimiento del plazo constitucional fijado para tal efecto, pese a que fue de los últimos en sentar las bases para, de forma progresiva, adecuar su normatividad a la reforma penal; pero no obstante los importantes avances que de igual forma se han venido generado a nivel nacional, estimo que aún es muy prematuro afirmar que nuestro país ya posee un modelo mexicano de sistema acusatorio, dado que si bien se cuenta con las bases para pensar que el establecido en Chihuahua pudiera ser considerado como tal, atentos incluso al hecho de haber sido la primera entidad de la República en implementar un sistema procesal penal integral de corte acusatorio — mérito que no puede negársele —, con todo, habrá de tomarse en cuenta que solo podrá considerarse que llegamos a ese nivel de sistema, cuando las incongruencias y los problemas que hoy por hoy se han venido sorteando a partir no solo de

dicha reforma Constitucional, sino de su implementación, hayan sido superadas en su mayor parte y se demuestre que las inconsistencias y complicaciones de aplicación e incluso de interpretación que por la necesaria práctica se evidencian en la diaria labor de los tribunales, han sido resueltas y/o que en su caso, se logró acoplarlas o incorporarlas al sistema de forma verdaderamente eficiente.

«Es un hecho que en los últimos años, los países latinoamericanos han venido adecuando sus sistemas de justicia a un nuevo esquema que pretende de forma más efectiva garantizar los derechos de los intervinientes en el proceso penal, transitando de modelos de corte inquisitivo hacia el modelo de sistema acusatorio que permita transparentar no solo la actuación de sus operadores, sino incluso, garantizar con ello mejor calidad en la impartición de justicia.»

¹ Información disponible en la página de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal: [<http://www.setec.gob.mx/>], consultada en: 2015-10-08.

II. Plazo constitucional

En efecto, existe aún mucho camino por andar para aspirar a adjudicarse logros definitivos, asumiendo anticipadamente que hemos salvado los escollos que normalmente se presentan en la armonización y consolidación de una empresa de tal magnitud y más aún, de aquellas que en el proceso de adaptación pueden llegar a evidenciar inconsistencias, máxime cuando ante la modificación de sus estructuras para ajustarlas a procesos de modernización, ponen en tela de juicio institutos jurídicos que históricamente han sido esenciales en los procedimientos judiciales del país. Es así que independientemente de la trascendencia de aquellas figuras y actuaciones procesales cuyo contenido y relevancia en absoluto se cuestionaba por considerarlas altamente garantistas, ahora al pretender mantenerlas y adaptarlas a los nuevos esquemas, ante el cambio de las estructuras jurídicas, deben ser analizadas y valoradas en su relevancia, utilidad y funcionalidad de forma escrupulosa, sin que su otrora importancia pueda considerarse parámetro único y suficiente para garantizarles una forzada e insostenida continuidad, apegada estrictamente a un sentimiento de *temor jusreverencial* inspirado únicamente en la evocación de glorias pasadas, pero estando conscientes que carece de congruencia y sentido de pertenencia.

Al cuestionar la continuidad de una figura que hasta ahora se había considerado como un elemento fundamental dentro de los procesos penales, a grado tal que no podían concebirse en su tramitación sin el denominado *plazo constitucional* previsto por el artículo 19 Constitucional², que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver la situación jurídica de las personas que quedan a su disposición dentro de las primeras 72 horas o su

² En efecto, del texto del artículo 19 Constitucional, se establece que:

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

...

...

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación

...

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. ...

...

...

duplicidad (con y sin detenido), ello indudablemente genera una serie de posturas, las más de defensa por la continuidad de tal figura, en tanto que por principio, resulta sacrílego para algunos pretender erradicar un instituto que durante muchos años ha sido una institución fundamental y pilar de los procesos penales en México, por lo que lógica y sustancialmente se enfocan en cómo justificar la inclusión de dicha figura dentro del nuevo esquema procesal; por ende, dada la irreversible transformación del sistema penal mexicano impuesto por la correspondiente reforma constitucional, sin desconocer la gran trascendencia de dicho instituto y sus valiosos aportes garantistas, ahora debería analizarse su eficacia, tanto en el Distrito Federal, como en las diversas entidades del país y la federación, sustancialmente con relación a su ineludible consecuencia, referida al dictado del denominado *auto de vinculación*³.

Atentos a lo expuesto, consideramos de particular importancia el que nos aboquemos a analizar con un poco de detenimiento

³ Rafael BLANCO y Leonardo MORENO, sostienen en tal aspecto que con relación al dictado del auto de vinculación a proceso en México, dicha figura no es compatible con el sistema acusatorio. Profesores del Diplomado Internacional en Litigio Penal, celebrado en Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado en enero de 2011.

algunas de las interrogantes que genera el contenido del texto mismo de diversos dispositivos, fundamentalmente de los concernientes a nuestra Carta Magna, así como del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, pues es evidente que con el nuevo esquema, no se ha analizado la utilidad de tal instituto con puntual reflexión y ponderación, lo que lleva obligatoriamente a valorar la conveniencia de que se hubiera considerado necesario mantener su vigencia, pues es un hecho que se trata de una figura que si bien, dada la tradición jurídico-penal mexicana, tuvo enorme importancia y en su momento cumplió su cometido; sin embargo, al haberse adoptado un nuevo sistema procesal, resulta cuestionada su utilidad, puesto que el sistema incorporado a nuestro contexto nacional, mayormente sustentado en el modelo Continental Europeo, ya cuenta con los mecanismos inherentes a garantizar el debido proceso, sin violentar los derechos de los justiciables y en su caso, de las víctimas del delito; de ahí que al tratarse de un esquema diverso que ha venido aplicándose con significativo éxito y eficacia a nivel latinoamericano, el insistir en incorporar elementos que carecen del debido soporte — en vez de generar certeza —, enrarece y distorsiona su utilidad, cuestionándolo y generando indefinición, pues no se ha logrado un consenso sobre cuál es el camino más

adecuado a seguir, no solo a partir de la literalidad o de la interpretación que se pueda realizar al respecto, sino de la congruencia misma que debe buscarse con el *principio acusatorio*, que sin lugar a dudas constituye la nota más distintiva que se pretende incorporar al sistema procesal mexicano a partir de la reforma penal constitucional.

«...aun cuando debería incorporarse una cuarta etapa de Ejecución oficialmente no reconocida como tal, es claro que un sistema de corte acusatorio visto en su conformación por etapas, es más que la oralidad, puesto que se fundamenta en diversos principios de igual trascendencia (como incluso así se desprende de lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional, relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación)...»

En este tenor, resulta evidente que al mantenerse el plazo constitucional, se generó una mera sustitución terminológica, pues ninguna duda queda de que el auto de vinculación se homologa a lo que antes de la reforma penal se denominaba *auto de formal prisión o de plazo constitucional*, pero que al intentar dejar de lado los vestigios legislativos del sistema inquisitivo, para forzar su permanencia, hubo de modificarlo para matizarlo en cuanto a su denominación, pretendiendo así que dicha figura no solo resultara novedosa sino complementaria, para introducirla a como dé lugar al nuevo contexto procesal, otorgándole carta de identidad.

III. Auto de ¿vinculación a proceso?

No olvidemos que el sistema acusatorio se integra sustancialmente por tres etapas:

- a) Investigación,
- b) Intermedia y,
- c) Juicio oral.

Efectivamente, aun cuando debería incorporarse una cuarta etapa de Ejecución oficialmente no reconocida como tal, es claro que un sistema de corte acusatorio visto en su conformación por etapas, es más que la oralidad, puesto que se fundamenta en diversos principios de igual trascendencia (como incluso así se desprende de lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional, relativos a la publicidad, contradicción,

concentración, continuidad e intermediación), sin embargo, es precisamente de tal contenido constitucional, que para referirnos al auto de vinculación a proceso, debemos formularnos diversas interrogantes:

¿El auto de vinculación debe emitirse respecto de cualquier delito?

En cuanto a este primer cuestionamiento, es de suma trascendencia advertir que conforme al texto del artículo 19 constitucional en su párrafo primero, el único supuesto en que se impone la obligación de emitir un auto de vinculación, lo es cuando una persona en calidad de detenido es puesto a disposición del juez, lo cual podrá suceder, por detención en flagrancia, caso urgente o bien, por cumplimiento de orden de aprehensión.

En efecto, no puede considerarse que exista otra forma de interpretar tal dispositivo cuando expresamente establece que: «**Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso ...**», resultando incuestionable, que excluye tácitamente la posibilidad de que por hechos delictivos que no ameriten privación de libertad deba emitirse tal proveído, puesto que solo contempla los supuestos en los que legalmente se

autorice la detención y al no realizarse al efecto mayor precisión con respecto de todas aquellas personas que comparezcan ante la presencia judicial sin encontrarse en calidad de detenidas, dado que a la autoridad no le está permitido realizar aquello que no se encuentra expresamente previsto, lleva a deducir, que en todas las investigaciones en que los justiciables no sean presentados ante el juez en calidad de detenidos, no obstante sean puestos o queden a su disposición, no procede que el imputado sea vinculado a proceso; de ahí que en tales supuestos, el seguimiento procesal realmente podrá ajustarse con mayor puntualidad y congruencia a las reglas del sistema acusatorio, conforme al cual, posteriormente a la formulación de la imputación, así como realizada la manifestación del imputado sobre si es su deseo declarar y deducidas las cautelares a imponer de ser el caso, se podrá fijar el plazo para el cierre de la investigación y pasar a la siguiente etapa.

¿En qué etapa debe de emitirse el auto de vinculación?

Con respecto de una segunda interrogante, cabe destacar que los Estados de la República en los que ya se ha implementado integralmente la reforma penal, una vez realizadas las correspondientes adecuaciones en sus respectivas constituciones y codificaciones procesales, ubican la

emisión del auto de vinculación a proceso de forma genérica, en la parte final de la etapa de Investigación (v.g. Chihuahua, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas), como en igual forma en su momento se propuso en el Código Modelo de la CONATRI y en los entonces proyectos de Ley Federal de Justicia para Adolescentes (ahora ya aprobada y en *vacatio legis*) y el de Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores (cuyo desatino se evidencia desde el nombre asignado, concerniente al término “infractores”), puesto que se refieren a dicho acto procesal después de que el imputado ha emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo y sin embargo, es importante destacar que en los procesos legislativos y/o de exposición de motivos, no se dio explicación suficiente del por qué había sido ubicada dentro de la fase formalizada de la investigación, variando únicamente en cuanto a si se emite antes de resolver sobre medidas cautelares y/o si es posterior a tal resolución, pero en ambos casos, se advierte que se mantuvo la idea de que dicho auto fuera emitido solo a partir de que hubiera sido formulada la imputación.

En esta tesitura, aun suponiendo sin conceder que se considerara que el sistema acusatorio pudiera ser compatible con el plazo constitucional y sobre todo que con ello se fuera más garante de derechos, el proveído

relativo al auto de vinculación en la etapa en que ha sido ubicado por el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, como ya lo hemos venido sosteniendo en diversos foros, únicamente conlleva a la “vinculación a un proceso de Investigación formalizada”⁴, de ahí que realmente no se esté llevando a cabo la vinculación a un verdadero proceso judicializado.

Sin embargo, ante tal perspectiva, se estima que para tratar de no generar mayor incongruencia que la ya advertida por el empeño de mantener una figura incompatible con el acusatorio, en todo caso debió considerarse que dicho auto se pronunciara una vez que el Ministerio Público ya hubiere formulado la *acusación*, ya que si bien al final tendría el mismo efecto innecesario y repetitivo que se establece con relación a la imputación, por lo menos se le habría ubicado en un momento más acorde a lo que se pretende, que es la vinculación a un proceso judicial y no a una investigación vigilada, amén de que el señalamiento relativo

⁴ Solo en el proyecto de Ley Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, se hace referencia con mayor exactitud y técnica al momento preciso en que ubicaron tal pronunciamiento en la parte final de su artículo 159 que establece: «El juez al resolver en estos casos, decidirá si debe **vincular a la persona adolescente a investigación** sobre los hechos que se le impute, **con efectos de procesamiento.**»

a que «Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. ...», referido en el quinto párrafo del artículo 19 constitucional y reiterado en el *Código Nacional de Procedimientos Penales* y que sin lugar a dudas contradice el sistema acusatorio, por lo menos en tal expresión, ya no chocaría con el contexto de tal esquema, como se verá a continuación.

Ciertamente, hasta en tanto no se realice una adecuada ponderación de congruencia del sistema que se prevé en la Constitución, podrá advertirse que no es la imputación la que debe prevalecer en el análisis del hecho delictivo, pues ésta se construye en una gran mayoría de los casos, exclusivamente con información poco sustentada, derivada de los datos de prueba obtenidos por el órgano ministerial para tal efecto, de ahí que si bien subsiste la disposición expresa del texto del quinto párrafo del artículo 19 constitucional ya referido, ello constituye un elemento más que evidencia la incoherencia generada por la ausencia de un análisis adecuado en el que se valoren tales aspectos de contenido y compatibilidad con el sistema acusatorio y por ende, al mantener el predominio de tal mandato por sobre el contexto integral de la reforma, habremos de advertir la mayor de las inconsistencias en el mismo cuerpo fundamental en cuanto a los efectos

derivados de las exigencias de sus propios dispositivos, cayendo en tal yerro quienes elaboraron el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, al sencillamente no llevar a cabo un análisis hermenéutico en su diseño, sino limitarse simplemente a copiar el mismo texto del artículo 19 ya referido, sin mayor reflexión y sobre todo, sin atender al hecho de que dicho numeral había sido superado en sus expectativas y modernidad procesal por los artículos 20 primer párrafo y posteriormente el 18 sexto párrafo Constitucionales (este último vinculado a la reforma más reciente al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio del 2015), en los que expresamente se plasma la obligatoriedad de implementar un “Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral”, dado que desde la exposición de motivos de la reforma penal constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, así quedó establecido y más aún, porque no fueron los únicos dispositivos que así lo previeron, sino que en absoluto se dejó lugar a dudas de la pretensión de su mandato, al resultar sumamente explícitos en lo que al efecto se dispuso en los artículos transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Décimo Primero de dicha reforma⁵.

⁵ Con especial énfasis el artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, es claro al disponer textualmente «El

Por lo tanto, es incontrovertible que no es acertado aseverar que el sistema debía ser imputativo y no acusatorio⁶, pues asumirlo de tal

sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.»

⁶ José Daniel HIDALGO MURILLO, sostiene que lo que dispone el quinto párrafo del artículo 19 Constitucional, significa que contrario a cualquier proceso acusatorio, en el de México no es la acusación sino la imputación, la que construye el hecho delictivo que se adecua al tipo penal. Ese párrafo significa que en México la *litis* se fija en la etapa de investigación no en la etapa intermedia como ocurre en las demás legislaciones latinoamericanas. Ese párrafo significa que la acusación ha de ser coherente con la vinculación, que el auto de apertura a juicio debe admitir el mismo de la vinculación, que en caso de sentencia, éste debe pronunciarse sobre el hecho de la vinculación. En definitiva, que desde la primera audiencia —en la primera etapa— y no en la audiencia intermedia —en la segunda etapa—, México exige comprometer al Ministerio Público en el hecho delictivo. No ignoro que, para concluir como lo hago, estoy interpretando la norma constitucional. Pero no es posible entender el proceso penal mexicano sino desde el artículo 19 constitucional. Desde ese numeral surge

forma, contradice sin lugar a dudas la adecuada interpretación de la normativa constitucional, dado que incluso, pese a lo dispuesto por el primero, cuarto y quinto párrafos del artículo 19 Constitucional, existe declaratoria expresa e incuestionable de que el sistema es “procesal penal acusatorio” y más aún que en los referidos artículos transitorios, como parte de la fundamentación de dicho sistema, se invoca al propio artículo 19, lo que lleva a considerar que si alguna interpretación puede sostenerse de dichos dispositivos constitucionales, no debe ser efectuada de forma aislada referente a un solo dispositivo, sino exegético sistémico a efecto de desentrañar en el contexto del mandato constitucional y su exposición de motivos, como debe concebirse para efectos de su

un proceso distinto al tradicional sistema acusatorio. Para ello no conviene interpretar la Constitución Política desde la norma sino que las leyes secundarias han de interpretarse conforme a la Constitución. Por eso, no son claras y, por el contrario, confusas e inconstitucionales, las normas que procuran regular la audiencia más mexicana del sistema procesal acusatorio. Una audiencia que no se puede interpretar ajenos a su evolución normativa y su interpretación constitucional., documento disponible en: [\[https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/\]](https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/), consultado en: 2015-12-11.

adecuada implementación y no sólo partir de figuras que se vuelven caducas ante el cambio, pero que se niega su exclusión al considerarlas todavía trascendentes e imprescindibles exclusivamente por su simbolismo jurídico y no por su eficacia procesal.

¿Cuál es el efecto del auto de vinculación una vez emitido?

No puede dejar de considerarse que independientemente de todo lo que pueda aducirse —amén de lo que ya se ha señalado pudiera ser invocado como argumento justificatorio respecto de mantener vigente el plazo constitucional—, el único y aparente efecto benéfico que engañosamente podría atribuírsele dentro del esquema acusatorio regulado en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, lo constituye el hecho de que, en cumplimiento del deber de ponderar los datos hasta ese momento aportados por la fiscalía, la resolución que en dicho plazo emita el juez de control, abre la posibilidad de liberación del imputado (decisión de no vincularlo a proceso), generando con ello la oportunidad de que se resuelva el asunto sin llegar a juicio o sin utilizar algún otro mecanismo alterno de terminación anticipada o de solución de conflictos.

No obstante, aun en tal supuesto, el resultado de dicha ponderación no justifica el plazo constitucional que se comenta, ni mucho menos el proveído que

obligadamente deba emitirse en tal virtud, pues ha de tomarse en cuenta que aún bajo esta óptica, la inclusión de un elemento adicional dentro del proceso penal de corte acusatorio, amén de que trastoca su esencia como se ha destacado, ningún beneficio reporta al justiciable, ni en general a la justicia, al constituir un elemento cuya relativa utilidad solo podría calificarse de victoria pírrica, puesto que después de agotado el plazo constitucional y dictado el auto de no vinculación, el imputado quedaría en una situación similar, pero de menor avance procesal que aquella en la que se encontraría de no existir dicho plazo; esto es, evidencia la inutilidad de una figura que de no existir, permitiría un mayor y adecuado avance procesal sin retrocesos innecesarios⁷.

IV. Vincular a proceso

Hagamos el siguiente ejercicio: en un caso hipotético, en el que se dictara la vinculación a proceso, veremos que con el sistema acusatorio, el plazo constitucional se posiciona de inicio, como una evidente e innecesaria prolongación temporal, que en el

⁷ Debemos estar conscientes de que el proceso no es una carrera de obstáculos, ni de recorridos de mayor kilometraje, puesto que lo que se busca en todo lo contrario, disminuir obstáculos y haciendo el proceso más ágil, sin trámites o actuaciones que solo entorpezcan la pretensión de una justicia pronta y expedita.

mejor de los casos, sería solo de horas, si es que se dicta en la misma *audiencia inicial*, haciéndose más gravoso sin embargo, en el caso de que el inculgado prefiera que se emita tal decisión dentro de las 72 horas siguientes a que hubiera quedado a disposición del órgano jurisdiccional (48 horas en tratándose de adolescentes), sin perjuicio de la ampliación o duplicidad del plazo por la que pueden optar, supuesto en que solo superado tal pronunciamiento vinculatorio, se pasaría a la fijación del plazo para el cierre de investigación, al cual en aplicación estricta de un sistema procesal de corte acusatorio, se hubiera llegado anticipadamente en la misma *audiencia inicial*, una vez fijadas las cautelares necesarias, con la ventaja de que en tal supuesto, el imputado no llevaría arrastrando un pronunciamiento judicial que le irrogó pérdida de tiempo, amén del impacto negativo que se genera en el ánimo de los justiciables por la derrota psicológica que ello representa a sus pretensiones de ser liberados, máxime cuando se trata de adolescentes, ante la formalidad procesal que dicha resolución involucra en los requisitos exigidos para su emisión y dada la incongruencia atribuida respecto de sus efectos⁸, sin contar que tal

⁸ Atentos a la serie de requisitos y efectos que se prevén y se le atribuyen para tal efecto dentro del *Código Nacional*

decisión judicial, pese a los requisitos legalmente exigidos, deberá sustentarse exclusivamente en datos de prueba o incluso, en el mejor de los casos, con medios de prueba ofrecidos para tal efecto, que desde luego, ante el resultado vinculatorio a proceso, debieron ser desvalorados judicialmente⁹.

V. No vinculación a proceso

En este mismo tenor, ante el supuesto de que en el caso hipotético, se resolviera no vincular a proceso, bien por resolución del Juez de Control o de Sala ante el correspondiente recurso interpuesto, el efecto liberatorio de dicha resolución — salvo los casos de demostración de causas de exclusión del delito o extinción de la pretensión punitiva, en que debería ordenarse la definitiva libertad del justiciable, aun con los

de Procedimientos Penales en sus artículos 316 a 318.

⁹ Desde luego, que la emisión del auto de vinculación a proceso admite recursos (Artículo 467, fracción VII, del *Código Nacional de Procedimientos Penales*), en cuyo caso, se estaría de igual forma ante los mismos escenarios, pues de confirmarse o modificarse sin consecuencias liberatorias la resolución del juez de origen, se evidenciaría aún más la inutilidad del plazo constitucional, mientras que de revocarse dictándose auto de libertad, se estaría en el siguiente supuesto que se expone para cuando se dicta auto de NO vinculación a proceso.

disensos de criterio que ello conlleva—, sería con reservas legales, dejando a salvo por consiguiente, la facultad investigadora de la fiscalía para recabar mayores datos de prueba con los que pudiera volver a insistir en su imputación y consiguiente petición de vinculación a proceso¹⁰, situación que de forma casi idéntica ocurriría (solo que con ahorro de todo el tiempo, recursos y estrés que produjo el plazo constitucional y sin que sea necesario esperar nueva cita para formalizar imputación), si no existiera el plazo constitucional, puesto que en tales términos, formalizada la investigación y una vez establecidas las cautelares procedentes, se fijaría plazo a la fiscalía para el *cierre de investigación*, a cuyo vencimiento, el ministerio público puede llegar a adoptar alguna de las siguientes decisiones:

1. Solicitar sobreseimiento (definitivo o temporal),
2. No hacer nada, y/o
3. Acusar.

En esta tesitura, lo que trasciende en el análisis que se realiza, es que dentro del sistema acusatorio que se implementa acorde a la reforma penal, el plazo constitucional, con su consiguiente apéndice de vinculación o no a proceso, solo viene a constituirse en un lastre que no

¹⁰ Así lo dispone el párrafo segundo del artículo 319 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

justifica su existencia, generando perjuicio sobre todo a los justiciables y afectando la celeridad procesal, puesto que no debe olvidarse la sentencia de COUTURE, quien señalaba al respecto que «... en el proceso, el tiempo es más que oro, es justicia...»¹¹, más aun cuando se refiere a la justicia para adolescentes, en que los tiempos dada su situación etaria deben ser más breves y desde luego, cualquier disminución en los trámites y plazos procesales devienen en beneficio de los mismos por su interés superior.

«...en cumplimiento del deber de ponderar los datos hasta ese momento aportados por la fiscalía, la resolución que en dicho plazo emita el juez de control, abre la posibilidad de liberación del imputado (decisión de no vincularlo a proceso), generando con ello la oportunidad de que se resuelva el asunto sin llegar a juicio o sin utilizar algún otro mecanismo alternativo de terminación anticipada o de solución de conflictos.»

¹¹ Citado por Raúl Vladimiro CANELO RABANAL en su artículo: «La celeridad procesal, nuevos desafíos. Hacia una reforma integral del proceso civil en busca de la justicia pronta.» *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista* 2006.

VI. Imputación y plazo constitucional injustificado

A efecto de verificar la relación entre dos figuras jurídicas que normativamente han sido previstas como compatibles a nivel constitucional, primero debemos realizar una debida ponderación del acto de formalización de la investigación, dado que evidentemente como se ha venido exponiendo, si se cuenta con datos de prueba adecuados y suficientes para tal efecto, el órgano ministerial, al advertir que se satisfacen los extremos mínimos requeridos, no tendrá obstáculos para someter al justiciable a una investigación formalizada y sostener tal postura eficazmente en el debate que al respecto podría generarse posteriormente a tal acto, sin recurrir a un plazo constitucional; esto es, sería el momento pertinente en que podrían realizarse los planteamientos que la defensa considerara pertinentes a efecto de generar y fijar debate que pudiera ser por ejemplo, respecto de la demostración de causas de exclusión del delito o extinción de la pretensión punitiva, en cuyo caso, una vez concluido el debate, el juzgador estaría obligado a resolver¹²; sin embargo, el yerro que se advierte en el desarrollo de las audiencias preliminares en el sistema acusatorio

previsto en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, es que se ha generado la idea de que el imputado y su defensa, aun después de haberse formalizado la investigación, deben seguir manteniéndose en silencio y esperar a que el juzgador matice su derecho con el plazo constitucional, lo cual es una apreciación inadecuada, puesto que sin necesidad de que se establezca dicho plazo, en cualquier país que haya adoptado el sistema acusatorio, se permite que el imputado se defienda, realizando las alegaciones y solicitudes necesarias que generen debate, sobre las que el juez debe pronunciarse.

En efecto, no debe olvidarse que dado el principio de igualdad procesal, por haber tenido oportunidad de conocer los datos de prueba con que cuenta la fiscalía, la defensa, posterior al acto imputativo puede, desde interrogar a su representado si le resulta adecuado como estrategia, hasta realizar los alegatos que estime pertinentes sobre la imputación realizada, debiendo ser resuelto el debate por el juzgador y/o pronunciarse respecto de las peticiones realizadas por las partes, dejando en claro por ello, que precisamente en un acto de absoluta coherencia, se eliminó el plazo impuesto a los juzgadores para tomar la declaración a los justiciables, en función de que es a éstos y su defensa a quienes compete decidir si el imputado declara o no en la misma audiencia inicial o en el momento en

¹² Así se prevé en el artículo 52 parte *in fine* del artículo 52 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

que lo estimen pertinente, más no corresponde a la autoridad decidir en qué momento recibe su declaración.

«...debemos realizar una debida ponderación del acto de formalización de la investigación, dado que evidentemente como se ha venido exponiendo, si se cuenta con datos de prueba adecuados y suficientes para tal efecto, el órgano ministerial, al advertir que se satisfacen los extremos mínimos requeridos, no tendrá obstáculos para someter al justiciable a una investigación formalizada y sostener tal postura eficazmente en el debate que al respecto podría generarse posteriormente a tal acto...»

En tal tenor, la misma premisa priva respecto de la situación jurídica del ya imputado, pues la actividad y estrategia defensiva dará la pauta para realizar alegatos con respecto de la imputación formulada, sin verse limitado por un plazo constitucional que formalmente como se ha expuesto, en cualquier caso obra en su contra. Efectivamente, consideremos que no solo en el caso de una investigación desformalizada sin detenido, sino más aún en el supuesto de detención por flagrancia o caso urgente, o inclusive por cumplimiento de una orden de aprehensión como ha sido referido previamente, la fiscalía ya contaría con datos de prueba que obren en contra del imputado y por ende la emisión de una resolución en ese estadio, solo genera mayor desequilibrio, máxime que contrariando los principios de presunción de inocencia e igualdad procesal y de que las actuaciones practicadas durante la investigación formalmente carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, el auto de vinculación constituirá en el ánimo judicial, un elemento que difícilmente podrá ser ignorado no solo para el fijar el plazo de cierre de la investigación, sino sustancialmente en la consiguiente formulación de acusación y en las cuestiones a debatir en la audiencia intermedia, independientemente del impacto y afectación psicológica que esa serie de actos procesales

progresivamente van generado en el justiciable, sobre todo si no es culpable del hecho atribuido¹³.

Por tal razón se estima que el cambio de sistema debe guardar total correspondencia con sus mecanismos procesales y por ende aun cuando en su momento de manera utilitaria y fundada algunas figuras jurídicas se hayan instituido como una garantía

¹³ Con relativo acierto, José Daniel HIDALGO MURILLO, asevera que «el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 viene interpretando equivocadamente la Constitución Federal, coincidiendo en que efectivamente, nunca ha existido el derecho del imputado de “renunciar al plazo” porque el plazo nunca ha sido del imputado sino del Juez y, nunca ha existido “dúplica” del plazo, sino, la obligación constitucional de que el Juez resuelva dentro de 72 horas y la posibilidad de que el imputado le otorgue prórroga de ese plazo. Cuando la Constitución refiere “plazo constitucional” lo hace en relación al que tiene el Juez de Control para definir la situación jurídica del imputado.» (Haciendo únicamente la aclaración que en el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, no hay una referencia legislativa que indique que tal acotamiento al plazo constitucional deriva de “la renuncia” del inculpado a dicho plazo). Centro de Investigaciones Jurídicas. Universidad Autónoma de Chiapas, documento disponible en: [\[https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/\]](https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/), consultado en: 2015-12-11.

en favor de los justiciables, el plazo constitucional hoy, de frente a la implementación de un sistema penal diferente, carece de utilidad, pues se prevén mecanismos también diversos y sobre todo efectivos que cumplen tal cometido, sobre todo en los casos de detenidos.

«...se estima que el cambio de sistema debe guardar total correspondencia con sus mecanismos procesales y por ende aun cuando en su momento de manera utilitaria y fundada algunas figuras jurídicas se hayan instituido como una garantía en favor de los justiciables, el plazo constitucional hoy, de frente a la implementación de un sistema penal diferente, carece de utilidad, pues se prevén mecanismos también diversos y sobre todo efectivos que cumplen tal cometido, sobre todo en los casos de detenidos.»

Uno de los aspectos argumentativos más débiles que pretende justificar el dictado del auto de vinculación, radica en que se modifica reduciendo el nivel de convicción que se refiere al estándar de exigencia respecto de los antecedentes que el juez debe valorar para su emisión; sin embargo, fuera del discurso interpretativo y del afán de justificación, el texto de la reforma es claro al requerir de antecedentes plausibles y razonables que permitan establecer que se está en presencia de un hecho delictivo y de la probabilidad de responsabilidad o participación del imputado¹⁴; por ende, tales estándares resultan de un nivel de exigencia idéntica al mutado auto de formal prisión y que incluso se asemeja al que se requiere también para la petición de medidas cautelares en detención o incluso para la acusación.

Así, el modelo constitucional de sistema acusatorio de nuestro país, si bien, como se adujo en la exposición de motivos de la reforma penal, pretende reducir el estándar probatorio con relación al otrora vigente “auto de formal prisión”, contrariando tales argumentos, el ya citado artículo 19 de la Carta Magna, no se limita a prever una temporalidad reducida para que el juzgador se pronuncie sobre la

situación jurídica del imputado, sino que además, impone cubrir determinados requisitos de forma y fondo (*que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió ó participó en su comisión*), lo que da pie a que tal mandato se complemente con un diverso dispositivo constitucional, que impone una obligación aun de mayor rigor técnico jurídico, por involucrar un derecho fundamental, relativo a que no se autoriza molestar a alguien en su «... persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.»¹⁵.

Luego entonces, no estamos ante un instituto del que simple y sencillamente, sin mayor complejidad deba realizarse un pronunciamiento atendiendo exclusivamente a la información respecto de los datos de prueba que derivan de los antecedentes con los que cuenta el ministerio público (carpeta de investigación) y que hará del conocimiento del imputado y del juzgador al formular la imputación, sino que impone un pronunciamiento judicial en forma, que incluso debe emitirse por escrito, con la consiguiente debida y suficiente motivación y fundamentación. Ante

¹⁴ Así se prevé en el artículo 316 fracción III del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

¹⁵ Artículo 16, primer párrafo de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*.

ello es que debe reflexionarse en la congruencia que el modelo debe guardar con respecto de aquellas figuras que carecen de utilidad para su implementación y solo conducen hacia incongruencias como las que se generan por la insistencia de su inclusión y más aún, en fases que las hacen mayormente cuestionables; de ahí que deba atenderse a la experiencia internacional, ya que en los países latinoamericanos que han implementado tal sistema de forma anticipada al nuestro, al no tener que enfrentarse a tal problemática, les ha permitido de forma más natural y eficiente adaptarse al modelo acusatorio¹⁶.

VII. Incompatibilidades del plazo constitucional

Ante este panorama, cabe enfatizar que el modelo acusatorio está diseñado de tal forma, que respecto de ciertas directrices de tradición jurídico penal locales, no compagina con el esquema constitucional

mexicano (previo o posterior a la reforma penal), puesto que en el mismo no hay lugar o espacio que permita, prevea o justifique involucrar figuras como el “*plazo constitucional*”, ni por consiguiente el “*auto de vinculación o no a proceso*”, las cuales si bien, como se ha reconocido, traen aparejados candados que insertados en un sistema procesal tradicional, han cumplido su cometido, dado que atendiendo a sus particulares circunstancias justificativas histórico-sociológicas, así como a su dinámica procesal en su contexto de origen, han contribuido a generar seguridad y certeza jurídica, pero que sin embargo, dicha figura actualmente deviene innecesaria para un sistema que no es preponderantemente escrito, sino básicamente oral, que no se tramita de forma oculta, sino que privilegia la publicidad, la contradicción y la inmediación, pero sobre todo, que se sustenta en la acusación.

Asimismo no debemos dejar de lado que en el sistema acusatorio, en atención al principio dispositivo, se impone con toda oportunidad que sean las partes las que determinen esa dinámica procesal a partir de su propia actuación; de ahí que actualmente no encuentren asidero las motivaciones del constituyente que válidamente todavía hasta 2008 mantenían la vigencia y trascendencia del plazo constitucional (salvo en los asuntos que continúen tramitándose

¹⁶ Incluso cabe advertir que en Chile, se prevé que una vez realizada la imputación, el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente al respecto y el juez tiene obligación de abrir debate sobre las peticiones que los intervinientes plantearen, pudiendo el imputado reclamar ante las autoridades del ministerio público la formalización de la investigación realizada en su contra, cuando considere que hubiere sido arbitraria (v.g. Artículo 232 Código Procesal Penal Chileno.)

durante la transición), justificando en favor de los imputados, no el que en los casos de detención, fueran puestos a disposición inmediata del órgano jurisdiccional — pues tal mandato si resulta compatible en la actualidad con el nuevo sistema procesal y por ende, mantiene su original relevancia —, sino exclusivamente en lo relacionado a que dicho juzgador cuente con un plazo perentorio para resolver su situación jurídica, emitiendo un proveído justificatorio de haber cumplido en tiempo, dado que al encontrarnos frente a un esquema diferente de procesamiento, se tiene que si bien ya ha sido formalizada la investigación al formular la imputación, aún no se ha realizado pronunciamiento alguno por parte del fiscal de si tiene intención de llevar a juicio al imputado, evidenciando así que de ser esa su pretensión, sobre todo en casos de flagrancia, desde ese instante ya cuenta con datos probatorios suficientes que le permitirían acusarlo¹⁷, por lo que de hacerlo, se

¹⁷ Como así sucede en esquemas latinoamericanos, en donde en casos, sobre todo de flagrancia, el Fiscal puede recurrir a figuras como “La terminación anticipada del proceso”, utilizada en Perú, o la del denominado “Juicio Inmediato”, prevista en Chile, como mecanismo de aceleración del proceso, que genéricamente implican que la audiencia de formalización de investigación, se transforma en una audiencia de preparación del Juicio Oral,

verificaría la utilización de un mecanismo procesal que haría más ágil el proceso hasta llegar a una resolución definitiva, siendo que la figura que podría actualizarse en tal supuesto, sería el Procedimiento Abreviado; sin embargo, atentos a lo dispuesto por la fracción I del artículo 201 en relación al 202 primer párrafo del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, aun tal instituto queda supeditado a que se cumpla con un requisito que incide en la figura cuya pertinencia y utilidad se pone en tela de juicio y por ende, no hace más que confrontar un mecanismo que tiende a resolver con mayor rapidez un conflicto, con otro que lo retarda y que por ende vuelve a ser cuestionado en su relevancia, al no justificarse su inclusión en el actual sistema procesal penal, deduciéndose que únicamente se pretende sin justificación validar su existencia.

En efecto nos referimos al auto de vinculación, dado que para determinar la admisión del procedimiento abreviado, amén de los demás requisitos establecidos, debería bastar como requisito ex ante, la formulación de imputación, sin que el imputado requiriera esperarse a que se realice pronunciamiento vinculatorio alguno o en su caso, se

no obstante, tal pedimento en la legislación chilena no obliga al imputado y su defensor, quienes pueden oponerse y ante ello, deberá emitirse resolución inmediata del juez.

agote el plazo constitucional, con lo que se evidencia que sobre todo en los procesos en donde se encuentren involucrados adolescentes, en vez de coadyuvar a la celeridad procesal, que como principio debe guardar relación estrecha con su eficaz aplicación para garantizar el derecho a una *tutela judicial efectiva*, se pierde en trámites que ninguna utilidad práctica reporta al proceso, sobre todo en relación con los justiciables, puesto que se empeña en la emisión de una resolución judicial que vincule al imputado, aunque a lo único que pueda vincularlo en tal momento como ya se analizó, es a una investigación que previamente ya se había formalizado en audiencia pública ante la misma presencia judicial, duplicando tal formalismo, solo que ahora llevado a cabo a través de una resolución judicial y no por un comunicado en presencia de un juzgador, solo cambiando al notificador y nulificando de facto el acto formal de la imputación al ser sustituido por el pronunciamiento vinculatorio del juez.

«...no debemos dejar de lado que en el sistema acusatorio, en atención al principio dispositivo, se impone con toda oportunidad que sean las partes las que determinen esa dinámica procesal a partir de su propia actuación; de ahí que actualmente no encuentren asidero las motivaciones del constituyente que válidamente todavía hasta 2008 mantenían la vigencia y trascendencia del plazo constitucional»

Otro de los inconvenientes y limitaciones en los derechos de los justiciables, que se generan con el plazo constitucional introducido al nuevo sistema, radica en que contradictoriamente no permite que el imputado y su defensa cuenten con el tiempo suficiente para recabar elementos de prueba que les permita desvirtuar los datos con los que se cuente hasta ese instante en la carpeta de investigación, imponiéndoles de forma anticipada una carga probatoria; puesto que, atendiendo a lo anteriormente comentado, desde el momento en que la fiscalía se encuentra en posición de formular la imputación, formalizando la investigación con o sin detenido, es un hecho que ya cuenta con suficientes datos de prueba de los que ha venido recabando no solo en virtud de aquellos conseguidos de forma inmediata, dada la forma en que tuvo conocimiento del hecho delictivo (denuncia, querrela, flagrancia), sino incluso por los obtenidos dentro del periodo de la retención y aun de los que pudiera haberse allegado dentro del plazo constitucional, al que el imputado y su defensa están supeditados; de ahí que si dicho imputado no tuviera que verse limitado en ese momento al referido plazo constitucional, desde luego, amén de que no se enfrentaría de inicio a una resolución judicial en contra (auto que lo vincula a proceso), contaría con un plazo más amplio (al igual que el órgano ministerial),

relativo al fijado por el juez de control para el cierre de la investigación.

Conclusión

En suma, debe considerarse a la luz de los argumentos expuestos, que el denominado “plazo constitucional” y su consecuencia jurídica relativo al “auto de vinculación o no a proceso”, introducido en un sistema de corte acusatorio, únicamente se convierten en un lastre, obstáculo o apéndice procesal que no reportan beneficio alguno de efectivización de derechos hacia los justiciables, ni en su caso, a las víctimas del delito, sino que imponen una injustificada prolongación temporal, así como actos formales innecesarios, amén de incongruentes que trastocan el sentido de la justicia pronta y expedita, además de contrariar el mandato constitucional de que los procesos penales sean *acusatorios*, puesto que de forma incongruente privilegia la imputación con respecto a la acusación, que como ya se ha destacado, sin lugar a dudas constituye la nota más distintiva que se pretende incorporar al sistema procesal mexicano a partir de la reforma penal constitucional y que en la obligación de realizar una interpretación conforme y el control de constitucionalidad correspondiente previsto como obligatorio por el artículo 1º Constitucional, debe tomarse la decisión más adecuada, inaplicando

aquellas disposiciones que resulten contrarias al mandato constitucional.

En efecto, independientemente de todos los razonamientos aludidos que evidencian que no se justifica la inclusión del plazo constitucional en un sistema acusatorio, de igual forma queda al descubierto la incongruencia que se genera al pretender mantener dicha figura en un contexto procesal diferente, puesto que si no se ha efectuado la acusación, que es el acto mediante el cual se formaliza el ejercicio de la acción penal¹⁸, no podría darse tampoco la formalización vinculante a un proceso judicial, sino solo a uno de investigación con control judicial, en reiteración y consiguiente nulificación del acto imputativo. De ahí que un proveído que al decir de los propios señalamientos expositivos de justificación, se emite con reducción del estándar probatorio, más allá de quebrantar el mandato de que el proceso sea acusatorio, deja al justiciable en la mayor de las inseguridades jurídicas, dado que en absoluto se cumple con el propósito del pronunciamiento de dicho auto, al asignarle estándares mayores incluso en los efectos que le atribuye la ley secundaria, contraviniendo el sentido de la reforma penal constitucional, puesto que para el seguimiento del

¹⁸ Así se encuentra previsto legalmente en la parte in fine del primer párrafo del artículo 335 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*.

proceso, da prevalencia al auto de vinculación, el cual a su vez, impone que debe ser emitido por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, con lo que finalmente trastoca el propósito acusatorio a que se refieren los artículos 18 y 20 Constitucionales en los respectivos sistemas de justicia de adolescentes y de adultos.

Fuentes consultadas

Bibliografía

BLANCO SUÁREZ, Rafael, *et al.*, *Litigación Estratégica en el nuevo proceso penal*, Legal Publishing, Santiago de Chile 2011.

Referencias electrónicas

CANELO RABANAL, Raúl Vladimiro, «La celeridad procesal, nuevos desafíos. Hacia una reforma integral del proceso civil en busca de la justicia pronta», *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista*, 2006, disponible en: [\[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/AFD8117BA4D5B7CF05257A7E0077571D/\\$FILE/2006_CaneloRaul.pdf\]](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/AFD8117BA4D5B7CF05257A7E0077571D/$FILE/2006_CaneloRaul.pdf), consultada en 2015-12-11.

HIDALGO MURILLO, José Daniel, «La vinculación a proceso para el Código Nacional de Procedimientos Penales», Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de Chiapas, documento disponible

en:

[\[https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/\]](https://iustopico.wordpress.com/2014/03/13/la-vinculacion-a-proceso-para-el-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/), consultado en: 2015-12-11.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, disponible en: [\[http://www.setec.gob.mx/\]](http://www.setec.gob.mx/), consultada en: 2015-12-11.

Legislación Nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación. CONATrib, 2007-2009.

Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Proyecto de Ley Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, Senado de la República.

Legislación Internacional

Código Procesal Penal Chileno.

Cursos

BLANCO SUÁREZ, Rafael y MORENO, Leonardo, Profesores del Diplomado Internacional en Litigio Penal, celebrado en Santiago de Chile, Universidad Alberto Hurtado, enero de 2011.